

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: PARMENIO OLARTE
DEMANDADO: URBANA SURCOLOMBIANA S.A.S.
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00272-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00068-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 753-754).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además recíproca. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».*²

*...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».*³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: JOSÉ ADÁN SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA Y OTROS
DEMANDADO: JOAQUÍN LÓPEZ CARREÑO Y OTRO
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00253-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00075-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 596-597).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsa de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsa de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además recíproca. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, **«se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa**. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».*²

*...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».*³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: FLAVIO PEREGRINO GUERRERO LÓPEZ
DEMANDADO: ELSA MARINA PRIETO DE RODRÍGUEZ
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00756-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00071-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *"conversación acalorada"* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *"fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita"*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 122-123).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además recíproca. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

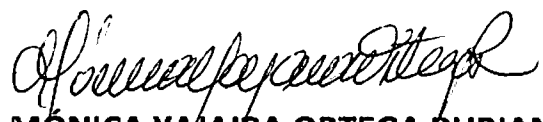
Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,



MÓNICA YAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: ZULMA ROCÍO BELTRÁN CASTELLANOS
DEMANDADO: CREPES Y WAFLES S.A.
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00034-03
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00074-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjuces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que audiencia del 17 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuales presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 201-203).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea **recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa**. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²*

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO EJECUTIVO LABORAL
DEMANDANTE: LUZ MERY PINZÓN PARRA
DEMANDADO: DIANA LUCÍA REYES BOLAÑOS
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2019-00469-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00076-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 60-61).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea **recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa**. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²*

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: LUZ ÁNGELA LOZANO FLÓREZ
DEMANDADO: INVERSIONES SINGERMANN S.A.S.
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2019-00378-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00050-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 19-20).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea **recíproca** o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²*

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: LUIS EMIRO ARIAS MARTÍNEZ
DEMANDADO: TECCA- TÉCNICOS EN COMBUSTIÓN Y TRATAMIENTOS DE
AGUAS S.A.S.
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2017-00489-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00077-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 182-183).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además recíproca. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impediende, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: ALBERTO CONTRERAS SUAREZ
DEMANDADO: JUAN CARLOS ARAGÓN Y OTROS
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2017-00031-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00057-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 203-204).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además recíproca. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zapaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO EJECUTIVO LABORAL
DEMANDANTE: MARÍA DEL CARMEN SUESCA TENJO
DEMANDADO: HEREDEROS DETERMINADOS DE LUIS ALFREDO GUEVARA
BETANCOUR
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2019-00355-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00047-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 21-22).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsión de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia⁵.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

⁵ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea **recíproca** o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».⁶*

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».⁷

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

⁶ Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

⁷ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁸

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁸ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: FABIÁN DAVID PACHÓN REYES
DEMANDADO: JHON ABRAHAM PRIETO PARRA
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00329-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00054-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjuces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 49-50).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsión de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también mediante queja presentada

por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia⁹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

⁹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además recíproca. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».¹⁰

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».¹¹

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

¹⁰ Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

¹¹ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"¹²

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

¹² Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: FABIÁN DAVID PACHÓN REYES
DEMANDADO: ARGEMIRO ZARATE FIERRO
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00327-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00053-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjuces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 56-57).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsión de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también mediante queja presentada

por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, **«se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa**. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».*²

*...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, **«por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos»**, debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».*³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: ÁNGELA YANETH GUZMÁN TRIVIÑO
DEMANDADO: LILIAN ANDREA RIVERA MÉNDEZ
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00251-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00044-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 40-41).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, **«se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».**²*

*...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, **«por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».**³*

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.


Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: OSCAR GUILLERMO REYES
DEMANDADO: POWERSEG LTDA y ARTÍCULOS DE CASA S.A.S.
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00597-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00046-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 25-26).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea **recíproca** o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²*

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: BETULIA GARCÍA GARCÍA
DEMANDADO: CASALINDA ASEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO Y CENTRO
COMERCIAL VIVIENZA PLAZA PRIMERA ETAPA
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00760-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00045-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuales presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 37-38).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además recíproca. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO EJECUTIVO LABORAL
DEMANDANTE: KAREN XIMENA GARCÍA QUECAN
DEMANDADO: CARLOS MARIO CASANOVA
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2017-00478-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00059-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 73-74).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea **recíproca** o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²*

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: LUZ MIRYAM ARANGO HURTADO
DEMANDADO: MARTHA DELIA GARZÓN
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00162-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00070-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 36-37).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea **recíproca** o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²*

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zapaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 N.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO EJECUTIVO LABORAL
DEMANDANTE: WILLIAM ARTURO CAPERA BERNAL
DEMANDADO: CARLOS TRIVIÑO HERNÁNDEZ
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2019-00315-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00078-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 13-14).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea **recíproca** o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²*

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: HÉCTOR LEONEL BALLARES
DEMANDADO: JUAN CARLOS ARAGÓN Y OTROS
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2017-00053-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00079-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 23 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 61-62).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además recíproca. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: RAFAEL ANTONIO REYES ARRIERO
DEMANDADO: JOSÉ RODRIGO ROZO RINCÓN
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2016-00240-02
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00069-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 23 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *"conversación acalorada"* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *"fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita"*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 192-193).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además recíproca. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 N.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: RAMÓN ANTONIO CARDENAS GUTIERREZ
DEMANDADO: CONSTRUCCIONES AREM S.A.S. y CONSTRUCTORA MMVR S.A.S.
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2019-00012-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00051-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 122-123).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsión de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea **recíproca** o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²*

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: LUZ ÁNGELA LOZANO FLÓREZ
DEMANDADO: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CHÍA S.A.S.
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2019-00377-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00049-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuales presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 23-24).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además recíproca. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: LUZ MERY PINZÓN PARRA
DEMANDADO: FUNDACIÓN HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00412-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00048-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjuces en quienes concorra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejo *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 199-200).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, **«se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa**. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».*²

*...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».*³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: JACQUELINE OSMA GUIZA
DEMANDADO: ROSA ELENA RODRÍGUEZ DE TENJO
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2019-00362-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00061-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 33-34).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afectó su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: JACQUELINE OSMA GUIZA
DEMANDADO: ELBERTO CORTES PORRAS
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2019-00361-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00062-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjuces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuales presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejo *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 22-23).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea **recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa**. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²*

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: FABIÁN DAVID PACHÓN REYES
DEMANDADO: JOSÉ GUILLERMO ÁVILA
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00323-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00063-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjuces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 27-28).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, **«se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».**²*

*...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, **«por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».**³*

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: FABIÁN DAVID PACHÓN REYES
DEMANDADO: HENRY CASTRO
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00330-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00055-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuales presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejo *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 51-52).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea **recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa**. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²*

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO EJECUTIVO LABORAL
DEMANDANTE: ORFA ROCIO MUÑOZ GALINDO
DEMANDADO: INVERSIONES DEL NEUSA S.A.S.
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00541-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00065-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuales presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejo *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 10-11).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, **«se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».**²*

*...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, **«por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».**³*

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: FABIAN DAVID PACHÓN REYES
DEMANDADO: ARSENIO ZARATE FIERRO
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00326-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00064-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 41-42).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSI auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además recíproca. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impediende, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

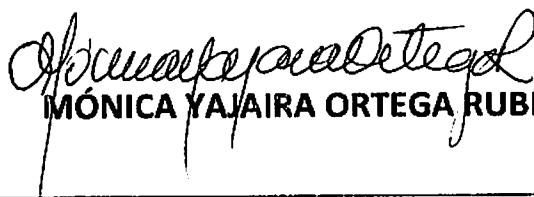
Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zapaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: ANANIAS BUITRAGO ROBAYO
DEMANDADO: JUAN CARLOS ARAGÓN Y OTROS
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2017-00033-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00066-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 23 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 109-110).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea **recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa**. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²*

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: JUAN PABLO ULLOA MORA
DEMANDADO: INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S.
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2019-00007-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00067-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjuces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 23 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 24-25).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además recíproca. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zapaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: JUAN FERNANDO CORREA SALCEDO
DEMANDADO: POWERSEG LTDA y OTROS
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00596-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00073-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuales presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 28-29).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además recíproca. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: FABIÁN DAVID PACHÓN REYES
DEMANDADO: JAIME ALBERTO OLAYA ACHURY
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00328-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00056-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 50-51).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en qué proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, **«se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa**. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».*²

*...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».*³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: JAIDI YOMARA HERRERA
DEMANDADO: TATHIANA MARSELLA RÍOS RÍOS y GUILLERMO ANDRÉS RUIZ
LÓPEZ
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2019-00005-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00052-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 72-73).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea **recíproca** o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²*

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: DIANA MARCELA VEGA PÁEZ
DEMANDADO: CLUB SAN JACINTO
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2017-00006-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00072-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjuces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 104-105).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además recíproca. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».*²

*...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».*³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: ZOILA MARITZA MUÑOZ AGUILAR
DEMANDADO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS
Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2016-00120-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00058-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 113-114).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden compromete el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ auto de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

*... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un **mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio** entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.*

*Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además **recíproca**. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).*

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

*“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea **recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa**. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²*

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de “grave”, lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir”

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio recíproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que “la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales”⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

REF: PROCESO ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: DILIA MARCELA ESCOBAR SUESCA
DEMANDADO: LAURA ANDREA VENEGAS TINJACA
RADICACIÓN PRINCIPAL: 25899-3105-001-2018-00410-00
RADICACIÓN INTERNA: 25307-3105-001-2020-00060-00

Girardot, Cundinamarca, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinte
(2020)

La Sala Plena del H. Tribunal Superior de Cundinamarca, mediante decisión del 11 de febrero del presente año dispuso remitir el proceso de la referencia a este despacho a fin de resolver el impedimento formulado por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá.

De acuerdo al art. 140 del C.G.P., aplicable por remisión del art. 145 del C.P.T., los magistrados, jueces o conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación establecidas en el art. 141 ibídem, deberán declararse impedidos una vez adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta, pasando el expediente al juez que deba reemplazarlo, el cual si encuentra configurada la causal asumirá el conocimiento del proceso o de lo contrario, remitirá el expediente al superior para su resolución.

Revisado el expediente se observa que mediante auto del 16 de enero del presente año la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá informa que ha venido conociendo de procesos instaurados por el profesional del derecho Dr. Fabián David Pachón Reyes, habiéndose presentado una *“conversación acalorada”* el día 10 de diciembre de 2019 al finalizar una audiencia.

Afirma que el contexto de la discusión se produjo en razón a que la funcionaria procedió a interrogar al abogado acerca de los motivos por los cuáles presentó un derecho de petición sobre información de carácter administrativa y que a su juicio no corresponde al contexto procesal planteado en cada expediente, considerando que la conversación dada dejó *“fincada una animadversión del abogado Pachón Reyes hacia la suscrita”*, hecho que según su dicho, afecta su imparcialidad, poniéndola en una circunstancia de enemistad grave frente al mencionado profesional del derecho.

Asevera que en dicha conversación traspasó *“la línea al discutir asuntos personales”* por lo que a partir de ella, administrar justicia dentro de los procesos donde actúa el mencionado abogado *“resulta incómodo”*, declarándose impedida para seguir continuando de las presentes diligencias (Fls. 38-39).

Establecidos los supuestos fácticos del presente asunto, pasa el despacho a considerar lo que en derecho corresponde:

La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha establecido que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso y, por ende, el régimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garantía (Sentencia T-080 de 2006).

Es así como la independencia e imparcialidad judicial tienen como fin garantizar que las actuaciones judiciales estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública y de esta manera lograr los cometidos de la administración de justicia.

Descendiendo a la norma bajo la cual la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá declara su impedimento, esta es los numerales 7º y 9º del artículo 141 del C.G.P., conforme al encabezado del auto citado, la primera de ella señala haber formulado alguna de las partes, representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia y que el denunciado se halle vinculado a la investigación, considerando este despacho que ello no se configura dentro del presente asunto, por cuanto ni el profesional del derecho Fabián David Pachón Reyes ni la funcionaria judicial se han denunciado ni penal ni disciplinariamente.

Lo anterior, en primer lugar, por cuanto la Dra. Sandra Jimena Salazar García hace referencia a una denuncia penal interpuesta en su contra por unos poderdantes del abogado, sin indicar siquiera sus nombres, afirmando que la misma no fue presentada por el profesional del derecho.

En segundo lugar, si bien la funcionaria judicial informa que ordenó la compulsas de copias para que la autoridad competente procediera a investigar la conducta del abogado Pachón Reyes, sin mencionar en que proceso, es de advertir que el art. 67 de la ley 1123 de 2007 estipula que la acción disciplinaria se podrá iniciar de oficio, por información proveniente de servidor público o por otro medio que amerite credibilidad y también

mediante queja presentada por cualquier persona, correspondiendo por lo tanto la compulsión de copias a la manera de poner en conocimiento la información acerca de una conducta que debe ser investigada, más no a la constitución propiamente de una queja o denuncia en contra de un profesional del derecho.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia estudió una acción de tutela cuyos hechos correspondía a un caso de similares condiciones al presente, donde no fue aceptada una recusación contra Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, señalando:

“Esta Sala no evidenció dicha trasgresión de derechos, por cuanto los argumentos esbozados no fueron proferidos de manera antojadiza o caprichosa, en tanto, se indicó que la decisión de compulsión de copias en contra de un funcionario simplemente se relacionaba con el cumplimiento de un deber legal sin que ello afectara la imparcialidad para resolver el asunto, también explicó que solo en casos excepcionales la jurisprudencia ha aceptado que dicha orden comprometió el criterio del juzgador y eso solo ocurre cuando al momento de expedirlas se hagan manifestaciones concretas sobre la responsabilidad o cualquier otro elemento del delito” (Sentencia STL220-2016 Rad. 63845 M.P. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno)

Por lo anterior, considera esta juzgadora que no encuentra configurada la causal de recusación establecida en el numeral 7º del art. 141 del C.G.P.

De manera más amplia y como ya se indicó, la Dra. Sandra Jimena Salazar García invoca igualmente la causal 9º de la norma citada, esta es, existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

Sobre las características de esta causal, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado:

“Cuando el funcionario por razones serias, reales e insuperables, se declara enemigo grave de algún sujeto procesal, es necesario separarlo del conocimiento del asunto para garantizar la imparcialidad, independencia y transparencia de la función de administrar justicia¹.

Por ende, cuando el juez pretende declararse impedido debe señalar las circunstancias específicas que afectan el principio de imparcialidad y cómo inciden en el caso concreto. Para así poder

¹ CSJ autc de 30 de abril de 2002, radicado 19312

establecer si efectivamente concurre o no alguna eventualidad que ponga en tela de juicio la independencia o imparcialidad del juez...

... En tales condiciones, para que sea factible reconocer la causal de impedimento con fundamento en el concepto de enemistad grave, resulta indispensable que la actuación cuente con elementos de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las partes que intervienen en el proceso.

Significa lo anterior que la enemistad no sólo debe ser grave, sino además recíproca. Por consiguiente, no es cualquier antipatía o prevención lo que la configura, sino aquella eventualidad que cuente con entidad suficiente para ocasionar que el funcionario judicial pierda la serenidad e imparcialidad que requiere para decidir correctamente (Auto 27 de agosto 2019 Rad. 55978 CSJ SCP).

En otro pronunciamiento del 29 de noviembre de 2018 Rad. 110010230000201800358-00 de Sala Plena es reiterado:

“Concretamente en lo que atañe a la enemistad, tratándose de una causal de contenido eminentemente subjetivo, «se requiere que sea recíproca o, por lo menos, que provenga del juez hacia el sujeto procesal y no a la inversa. Además, debe ser “grave”, lo que implica que no es cualquier antipatía o prevención la que configura el motivo, sino que debe tener una entidad tal que genere en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la imparcialidad necesaria para decidir correctamente».²

...Y si es el juzgador quien aduce la presencia de esa circunstancia impeditiva, «por relacionarse con apreciaciones puramente subjetivas y personales propias de la esfera interna, es él quien mejor puede valorar o cuantificar sus efectos», debiendo exponer, sin embargo, «en forma clara y convincente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dicha relación se gestó, y la incidencia en su ánimo actual».³

Igualmente, en auto del 30 de mayo de 2006 Rad. 25483 la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“No se trata de cualquier enemistad la que constituye la causal de dicho impedimento, es decir, no es una simple antipatía o prevención

² Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Auto de 12 de octubre de 2000. M.P. Jorge Córdoba P.

³ Auto de Sala Plena. 2 de abril de 1998. M.P. Fernando Arboleda Ripoll

entre el juez y el sujeto procesal, pues la ley la califica de "grave", lo que significa que debe existir el deseo incontenible de que el ser odiado sufra daño, generándose en el funcionario judicial una obnubilación que lo lleve a perder la debida imparcialidad para decidir"

Conforme con los criterios jurisprudenciales expuestos y de acuerdo a las afirmaciones realizadas por la Dra. Sandra Jimena Salazar García, considera esta juzgadora que las razones planteadas no reúnen los parámetros aludidos en precedencia para ser tenida en cuenta como enemistad de tal magnitud que pueda interferir en su juicio imparcial respecto de los procesos en lo que actúa el Dr. Fabián David Pachón Reyes, en primer lugar, por cuanto esta enuncia que el sentimiento de animadversión nace del abogado hacia ella lo que afecta su imparcialidad, requiriéndose que dicho sentimiento debe provenir es del juez hacia el sujeto procesal.

En segundo lugar, no indica la funcionaria judicial de forma clara y convincente los motivos y razones por las cuales la conversación o discusión acaecida transgredió los límites de la esfera personal de los involucrados a fin que ello genere un escenario de animadversión u odio reciproco, por cuanto no se evidencia algún conflicto personal, más allá de las naturales controversias propias de los asuntos procesales y del ejercicio del derecho al interior de una oficina judicial.

Desea destacar este despacho que el órgano máximo de cierre de la jurisdicción ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, ha reiterado que "la misión de administrar justicia exige del funcionario elevadas condiciones humanas que permiten a quien las posee mantener su imparcialidad, rectitud y ánimo sosegado, pese a las múltiples contingencias que suelen presentarse cuando de resolver conflictos de intereses se trata.

Por ende, admitir que eventualidades como las reseñadas constituyan causal para que el Juez sea separado del conocimiento de un asunto, implicaría autorizar a los sujetos procesales para lograr ese cometido cada vez que no están conformes con las decisiones de los funcionarios judiciales o cuando simplemente los consideran incómodos frente a la consecución de sus pretensiones. Lo cual sin duda, obstaculizaría el trámite y decisión de las controversias judiciales"⁴

Por lo anterior, este Juzgado no encuentra configurada causal alguna de impedimento alegada por la Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá y conforme al art. 140 del C.G.P. ordena remitir las diligencias al H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca para su resolución.

⁴ Auto 27 de agosto de 2019 Rad. 55978 M.P. Dr. Luis Antonio Hernández Barbosa.

NOTIFÍQUESE.

La Juez,


MÓNICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO

JUZGADO LABORAL DE CIRCUITO DE GIRARDOT
HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO
ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No. _____

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

República de Colombia



Departamento de Cundinamarca
Juzgado Único Laboral del Circuito de
Girardot

Girardot, veinticuatro (24) de febrero de 2020

INFORME SECRETARIAL: Pasa al despacho informando que el apoderado de la parte actora no ha aportado la publicación del emplazamiento. Lo anterior para lo pertinente.

ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO
SECRETARIA

REF: ORDINARIO LABORAL DE UNICA INSTANCIA

DEMANDANTE: EDELIO URIQUIJO LOZANO

DEMANDADO: COLPENSIONES

RADICACION: 25307-31-05-001-2019-00020-00

Girardot, ~~24 FEB. 2020~~

Atendiendo el informe secretarial NO es posible llevar a cabo la audiencia programada para el día 26 de febrero de 2020 y en consecuencia se ORDENA:

1. **REQUERIR** al Apoderado de la parte demandante para que se sirva allegar la publicación del emplazamiento para lo cual se concede el término de quince (15) días so pena de dar aplicación al parágrafo del artículo 30 del C.P.L.S.S.
2. **REQUERIR** al apoderado de la parte actora se sirva presentar el registro de defunción del señor EDELIO URQUIJO LOZANO.
3. **REQUERIR** al Curador Adlitem del demandante para que notifique so pena de sanción disciplinaria.
4. Una vez cumplido lo anterior se fijará fecha.

NOTIFIQUESE


MONICA YAJAIRA ORTEGA RUBIANO
JUEZ

<p>HOY _____, SE NOTIFICA EL AUTO ANTERIOR POR ANOTACIÓN EN ESTADO No _____</p> <p>_____ ZULEMA ARTUNDUAGA BERMEO SECRETARIA</p>
--